

Editorial

Históricamente, América Latina y el conjunto de países ubicados en las periferias del sistema mundial capitalista han cumplido un papel subsidiario en la acumulación de capital como proveedores de materia prima, fuerza de trabajo y excedente.

Con la globalización neoliberal, la economía mundo es articulada por redes de capital monopolista donde tejen sus circuitos las corporaciones financieras, industriales, agrícolas y comerciales e hilvanan relaciones de poder los organismos internacionales y los gobiernos imperiales. Las redes de capital corporativo controlan la división internacional de trabajo para apropiarse de nuevas fuentes de generación de ganancia extraordinaria, la savia que alimenta la voracidad capitalista. Las ganancias superlativas provienen, ahora, de emprendimientos que convierten a las regiones periféricas en enclaves exportadores, internalizados por los gobernantes e ideólogos de los países dependientes como modelos de desarrollo exportador insertados en una globalización inevitable y positiva. La inserción consecuente con las redes de capital global se basa en la atracción de la inversión extranjera como agente de desarrollo y las políticas ortodoxas de estabilidad macroeconómica, privatización y liberalización.

El desarrollo dependiente, si tal formulación es válida, adopta las estrategias de sobreexplotación del trabajo (flexibilización, precarización y insegur-

ridad laboral), extractivismo de recursos naturales (exportación de materias bruta y prima) y financiarización (especulación y bursatilización). Este desarrollismo renacido es compatible con las democracias liberales controladas por las oligarquías, incluso puede serlo con democracias participativas emanadas de gobiernos progresistas. Las transformaciones económico-políticas han trastocado las prácticas culturales, que relegan las prácticas y los principios populares para imponer la lógica del mercado vertebrada por el libre mercado, el individualismo, el consumismo y la competitividad. Al igual que por la subordinación epistemológica al pensamiento euroestadounidense —neoclásico, neoliberal y neoconservador— que impone los marcos categoriales y políticos para pensar las propias realidades. En tanto, persisten, y se recrudecen, las violencias sistémicas, criminales y subjetivas; prueba de ello es el inamovible patriarcalismo, la discriminación y el racismo.

Uno de los grandes temas de debate sobre la realidad latinoamericana tiene que ver con el extractivismo. Desde las posiciones más ortodoxas, el arribo de capitales depredadores es promovido deliberadamente en los sectores petrolero, gasero, minero, hidráulico, forestal, agrícola y constructor. Se supone que la inversión extranjera, y en menor medida nacional, aún siendo extractivista, despertará las fuerzas dormidas que el desarrollismo ha idealizado en distintos episodios del devenir latinoamericano: crecimiento, empleo y prosperidad. Ahora con el aliciente de que el Estado recaudador de impuestos podrá redistribuir parte de la renta en obra pública y política social. En esta lógica, el extractivismo pretende ser un motor del desarrollo nacional al amparo del incremento mundial de la demanda de materias primas para alimentar los requerimientos de economías en proceso de expansión, como destacadamente ha sido el caso de China. Esta visión no toma en cuenta los costos ambientales y humanos, ni tampoco contextualiza el papel que juegan las economías de enclave en el entramado de las redes de capital global, es una visión emanada del pensamiento capitalista salvaje, cortoplacista y rentista; indolente ante la degradación humana, condescendiente con el ecocidio y tolerante con la financiarización de grandes porciones de la renta de la tierra recaudada por los gobiernos.

Desde una posición alternativa a este desarrollo dependiente, el extractivismo se entiende como la sustracción de la riqueza bruta de la tierra y el mar para exportar materias primas, con nulo o escaso procesamiento, acorde con los requerimientos de los capitales globales, con altos costos socioambientales, precarios encadenamientos productivos regionales y exiguos aportes hacendarios. Las materias primas más demandadas son el petróleo, gas, minerales, maderas, agua y alimentos; aunque también se incluyen las obras de infraestructura y energética que soportan esta dinámica, como hidroeléctricas, carreteras, puertos y telecomunicaciones. Todas estas materias e infraestructuras están supeditadas a las redes de capital global, donde los países periféricos juegan el papel de meros enclaves, bancos de materias primas y reservorios de fuerza de trabajo barata. En dichos encadenamientos, la materia prima se exporta a otras latitudes donde serán procesadas y canalizadas a centros manufactureros y luego exportados a los mercados de consumo. En este trasiego interviene, en diferentes etapas, el capital financiero, con fondos de inversión y esquemas de bursatilización. Los gobiernos que otorgan las concesiones y permisos de explotación captan parcelas de la renta de la tierra, la población aledaña sufre despojo de los bienes comunes y el conjunto de los pueblos pierde bienes nacionales estratégicos. El extractivismo se presenta como el nuevo mantra del desarrollo para los países subdesarrollados, pero entraña en realidad una nueva forma de dependencia, que se suma al consabido intercambio desigual y la destrucción irracional de la naturaleza impuesta por el crecimiento exportador, sin conectarse a las necesidades radicales de la población.

Desde la perspectiva de los pueblos afectados, el extractivismo contiene el despojo de bienes comunes en modalidad de desahucio, es decir, representa la puntilla del modo de vida y trabajo propio de sociedades agrarias que articulan conjuntos humanos rurales y urbanos, la devastación de ecosistemas dotados de biodiversidad, saberes, tradiciones y culturas. Asimismo, significa el despojo del patrimonio cultural popular, y con ello la destrucción de formas de convivencia y reproducción social, que desmiembra conjuntos familiares,

formas de socialización y pautas identitarias, todo lo cual es subsumido a la lógica del capital. No sólo significa el despojo de patrimonio y cultura, sino también de nociones políticas populares, como la capacidad de autonomía y autodeterminación. En nombre del progreso, las comarcas son despojadas de sus autonomías territoriales para erigir obras materiales emblemáticas de la modernización íntimamente conectadas con los emprendimientos extractivistas: presas hidroeléctricas, autopistas y carreteras, complejos turísticos, desarrollo inmobiliarios, enclaves de monocultivo exportador y generación de biocombustibles; emprendimientos de megaminería en el subsuelo y a cielo abierto, extracción de hidrocarburos y gases, maderas, aguas y alimentos.

Las comunidades desplazadas pierden la simiente ancestral, la identidad étnica, la autonomía popular y la capacidad latente de autodeterminación. Como premio de consolación, los gestores del progreso suelen ofrecer a los sujetos despojados una pretendida reinsertión, por la puerta de atrás, a los megaproyectos instalados donde otrora se afincaban sus dominios territoriales autónomos en calidad de asalariados prestos a la sobreexplotación. Ahí donde florecían conjuntos humanos convivenciales y comunitarios, aun con sus propias contradicciones, usos y costumbres, ahora cunde la depredación ambiental (contaminación, pérdida de biodiversidad, destrucción de suelos, etcétera); proliferan las enfermedades, la violencia, el alcoholismo, la pobreza y la prostitución, en suma, el saqueo neocolonial. Las más de la veces, los despojados y los desplazados son dejados a su suerte, propensos a caer en las redes de la llamada economía informal, la criminalidad y la migración forzada.

Los gobiernos neoliberales, pero también los llamados populares o progresistas del continente americano, promueven el extractivismo como una estrategia de desarrollo nacional, pues se supone que la globalización neoliberal demanda fuertes cantidades de materias primas y los países del Sur disponen de una gran diversidad de recursos naturales que atraen inversión foránea, la cual se traduce en empleo, crecimiento e impuestos. Estos gobiernos difieren en los niveles impositivos y en las regulaciones ambientales, pero todos apoyan la exportación de recursos naturales con mecanismos depredadores.

Otro punto de discordia es la redistribución de parte de la renta de la tierra, dependiendo de la carga impositiva, a la sociedad bajo la forma de política de desarrollo o asistencia social, esto sin desconocer que buena parte de las recaudaciones se canaliza al gasto corriente y la financiarización, además de una cierta retención por corrupción de las burocracias. En el fondo, esta presunta ruta hacia el desarrollo no deja de ser una estrategia rentista y perpetuadora de la dependencia extractivista, es decir, en lugar de buscar otras formas de integración a la economía global, preservando autonomía, se conforman con ser terminales de las redes de capital global. Una posición muy vulnerable e insostenible, que más allá de una cierta recaudación apoyada en el auge coyuntural de la *commodities*, contribuye a profundizar la dependencia y el subdesarrollo.

Se precisa, entonces, un debate más acucioso, que desmantele la estrategia extractivista, como parte de las redes de capital global, donde el extractivismo es apenas uno de sus componentes, con la mira de plantear alternativas a este desarrollo depredador y dependiente, un debate que tiene lugar desde posiciones postextractivistas, pero que va más al cuestionar a fondo el modelo de desarrollo en su conjunto, no sólo en el plano nacional y local, sino desde la matriz, el sistema mundial capitalista, donde sientan sus reales los grandes capitales transnacionales. Ideas embrionarias con gran potencial transformador, como «otro mundo es posible», «mandar obedeciendo», «economía para la vida», «vivir bien», entre otras, requieren ser discutidas y articuladas en un diálogo intercultural, sin perder de vista las prácticas sociales que apuestan por alternativas al desarrollo realmente existente.

En la práctica, emerge una multiplicidad de formas de resistencias populares ante el extractivismo depredador de la megaminería y la explotación hidrocarburífera, se apuntala la defensa del agua y de la vida, la defensa de las cuencas y los territorios. Estos conflictos socioambientales responden, en la medida de sus posibilidades, a la explotación depredadora y contaminante de los grandes emprendimientos, a la implementación de tecnología intensiva que pulveriza los suelos a gran escala y a las políticas neoliberales y progresistas consecuentes con el extractivismo depredador.

En este número de *Estudios Críticos del Desarrollo* se aborda la cuestión extractivista en América Latina, en particular se analizan los casos de Argentina, Ecuador, Guyana y Colombia; asimismo se aborda el papel del capital extractivista canadiense en América Latina. En estas páginas se desmenuzan conceptos clave, políticas, estrategias, resistencias y alternativas. El propósito es incentivar un debate sobre la teórica y la práctica con miras a descifrar alternativas plausibles para los pueblos latinoamericanos.

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS